— FISCALIZACIÓN....

PL 6999 y OTROS

Proyecto de Ley N° 138/2021-CR

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
06 SEP 2021
RECIBIDO
Firma..... Hora..12:00

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite y Digitalización de Documentos
20 JUL 2021
RECIBIDO
Firma..... Hora 3:05 p.m.

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

OFICIO Nº 466-2021 –PR

Lima, 20 de julio de 2021

Señora
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a.i. del Congreso de la República
Presente.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a la Autógrafa de Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente. Al respecto, estimamos conveniente observar la misma por lo siguiente:

AFECTACIÓN A LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

1. La Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece en su artículo 8 que la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia; desarrollando en el numeral 9.3 la autonomía económica como la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los recursos que les asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones y competencias.

   En cuanto a la *autonomía de* los **gobiernos regionales,** el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 28607, establece lo siguiente:

   > *"Artículo 191.- **Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa** en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones."*

   Asimismo, el artículo 192 de la Constitución Política señala:

   > *"Artículo 192.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo."*
   > *Son competentes para:*
   > ***1. Aprobar** su organización interna y **su presupuesto.***
   > ***2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil.***
   > *(…)"*

   Por su parte, el artículo 2 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, regula lo siguiente:

   > *Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica*
   > ***Los Gobiernos Regionales** emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, **con autonomía política, económica y administrativa** en asuntos de su competencia, constituyendo, para su*

administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Por otro lado, en cuanto a la autonomía de los **gobiernos locales**, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, establece lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 194.- **Las municipalidades provinciales y distritales** son los órganos de gobierno local. Tienen **autonomía política, económica y administrativa** en los asuntos de su competencia. (...)" (énfasis agregado)*

Asimismo, el artículo 195 de la Constitución Política señala:

> *"Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.*
> *Son competentes para:*
> ***1. Aprobar** su organización interna y **su presupuesto.***
> ***2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.***
> *(...)".*

Por su parte, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, regula lo siguiente:

> *"ARTÍCULO II.- AUTONOMÍA*
> ***Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa** en los asuntos de su competencia.*
> *La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".*

En concordancia con la normativa citada, el Tribunal Constitucional[1] ha señalado que: *"(...) la consagración de la autonomía política, administrativa y económica (de los gobiernos regionales y locales) abarca las potestades, en su ámbito competencial, como poderes autónomos de autogobernarse por autoridades representativas electas; autonormarse vía reglas dictadas por su órgano normativo; autofiscalizarse, a través del mismo órgano normativo; autoadministrarse, en su organización interna, en su presupuesto y en los servicios públicos que debe atender, y autogenerar recursos, con potestad tributaria; todo ello en el marco de la Constitución Política y de (las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y de Municipalidades)",* sin romper el concepto unitario del Estado.

Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia recaída en el expediente N° 0020 y 0021-2005-AI) ha establecido que el test de competencia constituye una herramienta metodológica necesaria para determinar si una medida afecta o no la autonomía regional o municipal. De este modo se requiere verificar si las medidas dispuestas en la Autógrafa de Ley cumplen o no con respetar determinados parámetros, tales como: i) el principio de unidad (que a su vez engloba el principio de taxatividad y cláusula de residualidad, así como el de lealtad), ii) el principio de competencia (que comprende el respeto a los bloques de constitucionalidad que regulan las autonomías), iii) principio del efecto útil y poderes implícitos, y iv) principio de progresividad en la asignación de competencias y funciones.

---

[1] Tribunal Constitucional. Sentencias recaídas en los expedientes N° 004-2016-AI. Fundamento Jurídico 15, y N° 001- 2016-AI. Fundamento Jurídico 22

Por lo tanto, tanto la Constitución Política, la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, reconocen la garantía constitucional de la autonomía de los gobiernos regionales y locales, los cuales también realizan una gestión del presupuesto asignado de acuerdo a sus necesidades y prioridades.

En tal sentido, tal como ha sido señalado por la Secretaría de Descentralización, la obligación a los gobiernos regionales y locales, bajo responsabilidad, de financiar la asignación de recursos humanos para el apoyo técnico administrativo, así como de recursos logísticos tales como servicios, mobiliarios y materiales, además de la infraestructura necesaria para garantizar el normal desempeño de las funciones de los órganos de control institucional, propuesta en la Autógrafa de Ley, incide en aspectos presupuestales y administrativos que, conforme a lo señalado, les corresponde ejercer a dichos niveles de gobierno en el marco de su autonomía. Además, la Autógrafa de Ley no cuenta con mayor justificación normativa ni el análisis de proporcionalidad, de acuerdo a señalado por el Tribunal Constitucional, para poder determinar la legitimidad de dicha restricción a la autonomía regional y municipal.

INICIATIVA DE GASTO CON LA AUTÓGRAFA DE LEY

2. De la revisión de la Autógrafa de Ley, se advierte que esta señala en su artículo 2 que para el control concurrente dispuesto en el artículo 1, *se destina para su financiamiento hasta el 2% (dos por ciento) del valor total del proyecto de inversión, desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de su estructura de costos, como costos indirectos u otros costos, un rubro denominado Control Concurrente, el cual corresponde al financiamiento de las acciones a ser efectuadas por la Contraloría General de la República bajo dicha modalidad de control gubernamental.* Asimismo, en el artículo 3 contempla la disposición del mismo porcentaje para toda ejecución de cualquier iniciativa de contratación de bienes y servicios que no constituyan inversión que supere los diez millones de soles.

   En tal sentido, lo propuesto por la Autógrafa de Ley necesariamente implicaría asignaciones presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo en cada ejecución de inversión que supere los diez millones de soles; por ende, un gasto público.

   Al respecto, el artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece textualmente lo siguiente:

   > *"**Artículo 79**.- Los representantes ante el Congreso **no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos**, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. (...)"* (Énfasis agregado).

   Lo señalado, respecto a la restricción de los Congresistas de la República en la generación de gasto público, se encuentra regulado además en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, que les prohíbe la presentación de proposiciones de ley que involucren creación o aumento de gasto público:

   > *"**Requisitos especiales***
   > ***Artículo 76**. La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales:*
   > *(...)*

2. Las proposiciones de ley o de resolución legislativa que presentan los Congresistas lo serán a través del Grupo Parlamentario y requieren del respaldo:
(...)
Además, estas proposiciones de ley o resolución legislativa:
a) ***No pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público****. Esta regla no afecta el derecho de los Congresistas de hacer proposiciones en ese sentido durante el debate del Presupuesto. (...)"* (Énfasis agregado).

Siendo ello así, se puede afirmar correctamente que los representantes del Congreso de la República no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto público, salvo el que corresponde a su presupuesto; y, que la administración de la hacienda pública le corresponde exclusivamente al Presidente de la República. En ambos casos, ningún acto de los poderes públicos, ni la colectividad en general, pueden desvincularse de dichos preceptos.

Sobre este aspecto, el artículo 79 de la Constitución, al establecer que "el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto", significa que el Parlamento, motu proprio, salvo en lo atinente a su propio presupuesto, no tiene competencia para, ex novo, crear fuentes que originen gasto para la hacienda pública. Ello es sistemáticamente coherente con el artículo 118, inciso 17, de la Constitución que dispone que es competencia del Poder Ejecutivo, "administrar la hacienda pública".

Asimismo, el Tribunal Constitucional[2] ha señalado lo siguiente:

> *"(...) el principio de separación de poderes, y la idea del control y balance entre estos, debe interpretarse a la luz del artículo 118, inciso 17 de la Constitución. Este asigna al presidente de la República la competencia para administrar la hacienda pública. Además, debe tomarse en cuenta el artículo 79, que establece la prohibición a los congresistas de presentar iniciativas que supongan la creación o aumento de gasto público. Precisamente, nuestra Constitución contiene disposiciones relacionadas a la competencia de la administración de la hacienda pública y el principio de equilibrio presupuestal, para que las propuestas legales que demanden fondos del tesoro público sean acordes a las disposiciones constitucionales en materia presupuestaria".*

Dicho de otra manera, el Congreso de la República necesita de la participación y aprobación previa del Poder Ejecutivo para que se encuentre constitucionalmente justificada la creación de gasto público en general.

Sin embargo, de la revisión de los antecedentes de Autógrafa de Ley, no se observa que se haya efectuado un análisis económico que permita verificar que no se está afectando la sostenibilidad económica de las instituciones y está garantizándose la continuidad de la prestación de los servicios públicos.

En tal sentido, el artículo 2 y 3 de la Autógrafa de Ley podrían generar gasto público, vulnerando el artículo 79 de la Constitución Política, pues como ya se señaló, dispone la adopción de medidas y acciones necesarias para implementar la propuesta

---

2 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en Pleno Jurisdiccional de fecha 04 de febrero de 2021, en el expediente N° 016-2020-PI

normativa.

FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN LA AUTÓGRAFA DE LEY

3. El artículo 2 de la Ley N° 26889, Ley marco para la producción y sistematización legislativa, establece que los proyectos normativos deben estar debidamente sustentados en una exposición de motivos. Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de la Ley marco para la producción y sistematización legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008- 2006-JUS, precisa que la exposición de motivos consiste en la fundamentación jurídica de la necesidad de la propuesta normativa con una explicación de los aspectos más relevantes.

   El artículo 3 del citado Reglamento señala que como parte del análisis costo beneficio se debe sustentar la necesidad de la norma, la que debe estar justificada por la naturaleza de los problemas, los costos y beneficios probables y los mecanismos alternativos para su solución.

   En ese mismo sentido, cabe destacar que el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República dispone que las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, y el análisis costo-beneficio de la futura norma legal.

   El Análisis Costo Beneficio (ACB) "es el análisis del impacto social y económico de la propuesta del dictamen. Informa y demuestra que el impacto de la propuesta legislativa en el aumento del bienestar social es mayor que el costo de su vigencia"[3]. Es un marco conceptual que se utiliza para medir el impacto y los efectos de las propuestas normativas sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general[4].

   En esa línea, el adecuado desarrollo del Análisis Costo Beneficio (ACB) debe permitir advertir la necesidad y oportunidad de la regulación. Asimismo, dicho análisis integral "debe incluir las razones por las cuales la norma no solo es viable, sino que es necesaria"[5].

   El análisis señalado, es imprescindible en el contexto actual de nuestro ordenamiento jurídico, que se caracteriza por una tendencia a la sobrerregulación, "inflación legislativa" o "inflación normativa"; que como bien ya ha señalado la doctrina, "tiene graves consecuencias sobre el ordenamiento jurídico porque, al final de cuentas, este termina siendo excesivamente complejo, confuso, disperso y, en algunos casos, encontramos normas que sobran o que parecen innecesarias"[6].

---

3 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Manual de Técnica Legislativa / Manual de Redacción Parlamentaria. Aprobado por la Mesa Directiva 2012-2013, Lima, 2013, p. 60.

4 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Guía de Técnica Legislativa para elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo. Lima, 2018, p. 58.

5 Asociación Civil TRANSPARENCIA. Guía para la evaluación de proyectos de ley. Lima, 2008, p. 33.

6 GONZALEZ GOMEZ, Agapito. La importancia de la técnica legislativa, p. 134. En: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd nsf/650B029B82E65D1D0525773800642477/$FILE/La_importancia_de_la_t%C3%A9cnica_legislativa.pdf

A la fecha la Directiva N° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada por la Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, desarrolla el marco normativo del servicio de Control Simultáneo a cargo de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Institucional de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, que con la finalidad de contribuir oportunamente con la eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Dicho servicio es realizado con cargo al presupuesto de la Contraloría General de la República, por lo que actualmente ya existe la posibilidad de que este control sea efectuado por dicho órgano en el marco de sus competencias y de acuerdo a la programación que se realice.

En ese sentido, no se ha realizado una adecuada fundamentación jurídica que justifique la medida de expandir el mecanismo de control gubernamental en las obras públicas, inversiones y cualquier iniciativa de contratación de bienes y servicios que superen los diez millones de soles, obligando a los pliegos del gobierno nacional, regional y local a destinar hasta el 2% del valor o monto invertido.

Por ello, es posible concluir que la Autógrafa de Ley contiene una obligación de disposición patrimonial que no se encuentra adecuadamente justificada, por lo que se requiere mayor sustento y desarrollo a efectos de justificar la obligatoriedad del control concurrente a cargo del presupuesto asignado para las inversiones públicas.

SOBRE EL CONTROL CONCURRENTE EN INVERSIONES PÚBLICAS Y EN EL MECANISMO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP) Y OBRAS POR IMPUESTOS (OXL), ASÍ COMO SU IMPACTO PRESUPUESTARIO

4. La Autógrafa de Ley establece como objeto de control concurrente a cargo de la Contraloría General de la República, la ejecución de inversiones que genere el desembolso de recursos públicos y/o garantías financieras o no financieras por parte del Estado, lo que incluye a las obras públicas, las inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones público privadas u otros mecanismos de inversión, a cargo de los pliegos del gobierno nacional, regional y local, entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, cuyos montos superen los diez millones de soles.

   Para tales efectos, los artículos 2 y 5, así como la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Autógrafa de Ley, establecen como financiamiento destinar hasta el 2% de su valor total, desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de su estructura de costos, como costos indirectos u otros costos, un rubro denominado Control Concurrente; de igual forma en cuanto a la implementación señala que se efectuará en la fase de formulación y evaluación, y en la fase de ejecución de aquellas inversiones públicas cuyo monto supere los diez millones de soles, la misma debe contar en su estructura de costos, una partida para el financiamiento de las acciones de control concurrente a cargo de la Contraloría General de la República y estará a cargo del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, a incorporar, en sus instrumentos de gestión, la implementación de la previsión de recursos financieros para el control concurrente.

   Respecto a las inversiones en fase de ejecución, la Única Disposición Complementaria Transitoria, señala que para el caso de las inversiones que se encuentren en fase de

ejecución, se incorporará dentro de los costos indirectos u otros costos, de la estructura de costos de la inversión, el rubro denominado Control Concurrente, dentro de la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros.

Como puede advertirse, la propuesta plantea que se destine para el financiamiento de las acciones a ser efectuado por la Contraloría General de la República como parte del control concurrente, hasta el 2% del valor total de la inversión, desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de su estructura de costos, como costos indirectos u otros costos, un rubro denominado Control Concurrente. Asimismo, se propone que en la fase de formulación y evaluación, y en la fase de ejecución de aquellas inversiones públicas cuyo monto supere los diez millones de soles, la misma debe contar en su estructura de costos, una partida para el financiamiento de las acciones de control concurrente a cargo de la citada Entidad.

Al respecto, cabe señalar que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad orientar el uso de los recursos públicos a través del desarrollo de inversiones orientadas a la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país[7]. Asimismo, los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, con un enfoque territorial[8].

Conforme a lo establecido en el inciso 6 del artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, las Inversiones son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición. No comprenden gastos de operación y mantenimiento. Al respecto, los Proyecto de inversión corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios.9

Así, un proyecto de inversión debe contener los factores de producción de infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículo, terreno e intangibles (capacidad humana, capacidad organizacional, activos digitales, conocimiento) que son necesarios e indispensables para solucionar de manera integral un problema identificado en la provisión de servicios a una población determinada en un área de influencia.

En ese sentido, los rubros considerados como costos directos de un proyecto de inversión están referidos a las acciones sobre los factores de producción o activos orientados a intervenir con el proyecto de inversión sobre la capacidad y/o estándares de calidad de una unidad productora[10]; por otro lado, como costos indirectos del proyecto de inversión, se debe considerar a aquellos que incurre un contratista cuando el proyecto se ejecuta por la modalidad de administración indirecta como son los gastos

---

7 Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

8 Literal c del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1252, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1432, publicado el 16 septiembre 2018.

9 Inciso 14 del artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

10 Unidad productora es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. Constituye el producto generado o modificado por un proyecto de inversión

generales y la utilidad. Finalmente, dentro de los otros costos de inversión se consideran aquellos que no constituyen acciones pero que deben ser incluidos dentro del costo de inversión para que el proyecto se ejecute satisfactoriamente, como la supervisión, la gestión del proyecto, la elaboración de expediente técnico o documento equivalente, así como la liquidación física y financiera.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente. En este rubro se reúne una serie de normas relacionadas a los distintos tipos de control que ejerce tanto la Contraloría General de la República como los demás órganos del Sistema Nacional de Control, encontrándose el control concurrente como parte de los servicios de control simultaneo.

En consecuencia, siendo que la estructura de costos de una inversión está estrictamente relacionada a la formación de capital a través de acciones sobre los factores de producción o activos que modifican la capacidad y/o estándares de calidad de un unidad productora, y que el control concurrente es una actividad permanente propia de las funciones regulares de los órganos de control, esta última no tiene lugar en la estructura de costos de una inversión de un proyecto en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

En esa línea, el control concurrente al ser una actividad permanente de los órganos del Sistema Nacional de Control, bajo el sustento de la normatividad vigente, no constituye gastos de inversión sino concierne a la operación para el funcionamiento de los mismos, por lo que su financiamiento debe corresponder a gasto corriente.

En ese sentido, el financiamiento del control concurrente no corresponde a un costo directamente vinculado con la formulación y evaluación y ejecución del proyecto de inversión, por lo que no debe ser financiado con créditos presupuestarios destinados a inversiones ni tampoco puede ser considerado como parte del costo del proyecto de inversión, tal como proponen en la Autógrafa de Ley al señalar que los gastos para el control concurrente por parte de la Contraloría General de la República se incorporen dentro de los costos indirectos u otros costos, de la estructura de costos de la inversión.

Por lo tanto, se formula observación a los artículos 2, 5 y la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Autógrafa de la Ley, toda vez que resultan ser incompatibles con el marco técnico normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

5. En esa misma línea, con relación a la propuesta que el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, incorpore en sus instrumentos de gestión, la implementación de la previsión de recursos financieros para el control concurrente, se debe señalar que entre las funciones establecidas en el párrafo 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1252, se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y en su calidad de más alta autoridad técnico normativa, entre otros, dicta los procedimientos y los lineamientos para la programación multianual de inversiones y el Ciclo de Inversión, aprueba las metodologías generales teniendo en cuenta el nivel de complejidad de los proyectos.

En ese sentido, tampoco corresponde que se incorpore en las directivas, procedimientos, lineamientos, instrumentos metodológicos de alcance general y demás normas complementarias del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, necesarias para su funcionamiento y la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión, disposiciones para la implementación de la previsión de recursos financieros para el control concurrente a cargo de la Contraloría General de la República

6. Por otro lado, respecto a las Asociaciones Público Privadas (APP), corresponde señalar que, si bien la propuesta legislativa habilita a los pliegos involucrados a realizar modificaciones presupuestales, no se menciona si dichas labores se financian exclusivamente con recursos públicos o si pueden ser incorporados dentro del costo total del proyecto durante el proceso de promoción. Esta precisión resulta necesaria por los efectos económicos o financieros que la propuesta pudiera generar, sin perjuicio del análisis de legalidad correspondiente.

   De esta manera, si el 2% al que hace referencia la propuesta legislativa, no es financiado directamente por el Estado, podría ser considerado dentro de los costos del proyecto, lo que finalmente se traduciría en un mayor cofinanciamiento, mayores tarifas o menor retribución al Estado; por lo que debe evaluarse la idoneidad y la necesidad de la medida, frente a alternativas distintas de financiamiento.

   Del mismo modo, es importante que en la Autógrafa de Ley se precise la naturaleza o el tratamiento jurídico de dicho porcentaje, a fin de evitar confusiones entre los agentes que conforman el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP); ya que en los proyectos de APP existen diversos pagos vinculados al proyecto, como el aporte por regulación o el aporte al Fondo de Promoción de la Inversión Privada – FONCEPRI.

   Cabe precisar que los proyectos ejecutados bajo la modalidad de APP se caracterizan por tener mecanismos de recuperación de inversiones de largo plazo. Así, en las APP cofinanciadas, la entidad sólo considera en cada ejercicio, el monto de la cuota anual correspondiente a cada proyecto y no el monto total de inversión. Por esta razón, la Autógrafa de Ley debe evaluar la pertinencia y viabilidad de considerar como base de cálculo el valor total de inversión, más aún si existen entidades con una cartera de proyectos en ejecución bastante amplia y con costos de inversión muy altos.

7. Por otro lado, respecto al mecanismo de Obras por Impuesto (Oxl),actualmente la Contraloría General de la República viene ejerciendo el control simultáneo y posterior, y cuenta con la atribución de requerir información a las entidades públicas y empresas privadas, según lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria y Final de Texto Único Ordenado de la Ley N° 2923011, y los artículos 5 y 31 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230[12], sin que ello signifique destinar el 2% (dos por ciento) del monto del valor total de la inversión o iniciativa a ejecutar con cargo al presupuesto institucional de las entidades.

   En ese sentido, la Autógrafa de Ley deviene en innecesaria dado que no se requiere la emisión de una norma expresa para la participación y el financiamiento de la

---

11 Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF.
12 Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

Contraloría General de la República, para la implementación del control concurrente en los proyectos bajo el mecanismo OxI.

Asimismo, la propuesta contenida en la Autógrafa de Ley incrementaría el costo de los proyectos de OxI por la implementación del 2% del monto de inversión adicional para la aplicación del control concurrente, lo que implicaría una demanda adicional de recursos por parte de las entidades públicas involucradas. De ese modo, al incrementar los costos en los proyectos, las entidades públicas tendrían menos recursos para el desarrollo de proyectos OxI (incluida su operación y mantenimiento), ya que el costo del control concurrente podría ser incluso mayor al reconocimiento de la inversión de la empresa privada por la elaboración de los estudios de preinversión[13].

Sin perjuicio de lo expuesto, desde el punto de vista estrictamente presupuestario se formula observación debido a que la citada Autógrafa de Ley contravendría las reglas para la estabilidad presupuestaria, según lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, toda vez que no se demuestra la disponibilidad de los créditos presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, aprobado mediante la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, así como su sostenibilidad en los próximos años; asimismo, contravendría el Principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

SOBRE LA EXONERACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

8. De la revisión del texto de la Autógrafa de Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, se advierte que el numeral 6.3 del artículo 6° contiene la exoneración de la presentación de documentos de gestión, conforme a lo siguiente:

> ***Artículo 6º.- Medidas para garantizar el Control Gubernamental durante el proceso de absorción de los órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República.***
>
> *6.1 Las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, así como las entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del FONAFE, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control mantienen, con cargo a su presupuesto institucional, el financiamiento para la asignación de recursos humanos para el apoyo técnico administrativo, así como de recursos logísticos tales como servicios, mobiliarios y materiales; e infraestructura necesaria para garantizar el normal desempeño de las funciones de los órganos de control institucional (OCI).*
>
> *6.2 Excepcionalmente, la Contraloría General de la República podrá incorporar a los OCI de las entidades señaladas en el párrafo precedente, que no hayan realizado la transferencia financiera, sin perjuicio de continuar con las gestiones administrativas e identificación de responsabilidades que correspondan.*

13 Considerando la clasificación para la formulación de proyectos según Invierte.pe.

6.3 ***Durante el proceso de incorporación progresiva de los OCI, establecido en la tercera disposición complementaria final de la Ley 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del sistema Nacional de Control, execptúase a la Contraloría General de la República de la presentación de los documentos de gestión institucional para la actualización de los registros en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.*** (Énfasis nuestro)

Sobre el particular, es necesario indicar que, la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, tiene por objeto establecer las normas y disposiciones requeridas para el fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como de optimizar sus capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción.

En esa línea, la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, así como la Ley N° 30742 habilitan a las entidades a poder realizar transferencias financieras a la Contraloría General de la República para diversos fines, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el financiamiento para la realización de auditorías financieras, la incorporación del personal de los Órganos de Control Institucional, así como el financiamiento para los programas de capacitación que brinda la Escuela Nacional de Control.

Cabe señalar que, la Contraloría General de la República del Perú se encuentra en un proceso de reforma y fortalecimiento que implica, entre otros aspectos, la expansión de la capacidad operativa del Sistema Nacional de Control, mediante la incorporación de nuevo personal, el personal de los Órganos de Control Institucional que se encuentren en proceso de absorción, así como los profesionales del Programa de Formación e incorporación de Nuevos Talentos en Control Gubernamental.

Ahora bien, en relación a la propuesta normativa que exceptúa a la Contraloría General de la República de la presentación de los documentos de gestión institucional para la actualización de los registros en el AIRHSP, es importante señalar que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas tiene a cargo brindar opinión favorable sobre el Presupuesto Analítico de Personal de cada entidad del Sector Público, previo a su aprobación[14]; dicho documento de gestión contiene el detalle del presupuesto programado para las plazas requeridas por la Unidad Ejecutora, asegurando que se cuenta con el financiamiento necesario para cumplir con las obligaciones remunerativas y sociales que conlleva la contratación de la persona.

En tal sentido, el requisito de su presentación previo al registro en el AIRHSP, constituye un mecanismo fundamental para asegurar la correcta programación del presupuesto público y evitar contingencias posteriores referidas a solicitudes de demandas adicionales que pudieran darse lugar debido a un registro inadecuado de las plazas y/o montos.

---

14 Numeral 2.4 del artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 044-2021.

Por las razones expuestas, se observa la Autógrafa de Ley, en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú.

Atentamente,

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

Proyecto de Ley: 6999/2020-CR y otros.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 20 de julio de 2021

Pase a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, con cargo de dar cuenta de este procedimiento al Consejo Directivo.

YON JAVIER PÉREZ PAREDES
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CONGRESO
REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, **03** de **setiembre** del **2021**

De conformidad con lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión realizada el 1 de setiembre de 2021, actualícese en el estado en que se encuentra, el proyecto de ley N° 6999/2020-CR **asignándole el N° 138/2021-CR** y pase para su estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de:

1.- FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA.

HUGO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CONGRESO
REPÚBLICA

ÁREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de Independencia"

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
GRUPO PARLAMENTARIO
FUERZA POPULAR
06 SEP 2021
RECIBIDO
Firma _____ Hora 5:15 p.m.

Lima, 1 de setiembre de 2021

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite y Digitalización de Documentos
06 SEP 2021
RECIBIDO
Firma _____ Hora 11:10 a.m.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
J. VILLENA
DESPACHO PARLAMENTARIO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
VILA
Jefe del Departamento de Relatoría y Agenda

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
J. ANGELES
Director General Parlamentario

Oficio 038-2021-2022-ADP-CD/CR

Señor congresista
HERNANDO GUERRA GARCÍA CAMPOS
Portavoz del Grupo Parlamentario Fuerza Popular

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de la señora Presidenta del Congreso de la República, para hacer de su conocimiento que el Consejo Directivo del Congreso, en su sesión semipresencial realizada el 1 de setiembre de 2021, con la dispensa del trámite de sanción del acta, en atención a su petición formulada con los oficios 010 y 0017-2021-2022/GPFP-CR, acordó actualizar, en el estado en que se encuentra, el proyecto de ley 6999/2020-CR, autógrafa observada por el señor presidente de la República, por la que se propone la ley que establece medidas para la expansión del control concurrente.

Con esta oportunidad reitero a usted, señor congresista, la expresión de mi especial consideración.

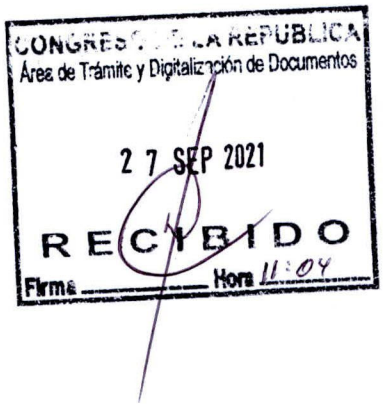
Atentamente,

HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayor del Congreso de la República

c.c. Área de Trámite y Digitalización de Documentos

JAI/jvch.

683951


CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite y Digitalización de Documentos
27 SEP 2021
RECIBIDO
Firma
Hora 11:04

Proy. 138

CONGRESO
REPÚBLICA
GRUPO PARLAMENTARIO
FUERZA POPULAR

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Lima, 12 de agosto del 2021

OFICIO N.° 010-2021-2022/GPFP-CR

Señora Congresista
MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Presente. -

Asunto: Actualización del Proyecto de Ley N° 06999/2020-CR

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted con el propósito de saludarla y a la vez solicitarle tenga a bien agendar para la próxima sesión del Consejo Directivo la actualización del proyecto de ley N° 06999/2020-CR que propone la "LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA EXPANSIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE", el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso Complementario 2020-2021 y posteriormente observado por el Poder Ejecutivo, el mismo que al término de la legislatura del periodo parlamentario anterior quedó pendiente de nuevo dictamen en la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Cabe precisar que resulta de importancia continuar con el trámite de dicha iniciativa legislativa en la medida que permitirá impulsar la transparencia y la lucha contra la corrupción en los procesos de contratación pública a nivel nacional.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
GUERRA GARCIA CAMPOS
Hernando FIR 07202572 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/08/2021 14:54:33-0500

RV. 675131

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 1 **de** Setiembre **de** 2021

Con acuerdo del Consejo Directivo,

Se actualizó, en el estado en el que se encuentra, el Proyecto de Ley 6999/2020-CR.

JAVIER ANGELES ILLMANN
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Proy. 138

PERÚ
CONGRESO de la REPÚBLICA
GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Lima, 18 de agosto del 2021

OFICIO N.° 0017-2021-2022/GPFP-CR

Señora Congresista
MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Presente. -

Asunto: Actualización del Proyecto de Ley N.° 06999/2020-CR y dejar sin efecto el OFICIO N.° 010-2021-2022/GPFP-CR.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted con el propósito de saludarla y a la vez, de conformidad con el Acuerdo de Mesa 019-2021-2022/CONSEJO-CR del presente año, solicitamos tenga a bien agendar para la próxima sesión del Consejo Directivo la actualización del proyecto de ley N.° 06999/2020-CR que propone la "LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA EXPANSIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE".

Cabe precisar que dicho proyecto fue aprobado por el Pleno del Congreso Complementario 2020-2021 y posteriormente observado por el Poder Ejecutivo, el mismo que al término de la legislatura del periodo parlamentario anterior quedó pendiente de nuevo dictamen en la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

En ese sentido, resulta de importancia continuar con el trámite de dicha iniciativa legislativa en la medida que permitirá impulsar la transparencia y la lucha contra la corrupción en los procesos de contratación pública a nivel nacional.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: AGUINAGA RECUENCO Alejandro Aurelio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/08/2021 12:44:49-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GUERRA GARCIA CAMPOS Hernando FIR 07202572 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/08/2021 09:22:53-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/08/2021 11:23:28-0500

HERNANDO GUERRA-GARCÍA CAMPOS
Congresista de la República
Portavoz Titular
Grupo Parlamentario Fuerza Popular

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MOYANO DELGADO Martha Lupe FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/08/2021 13:17:12-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CASTILLO RIVAS Eduardo Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/08/2021 15:16:49-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CUEVA MARTINEZ Leslie Vivian FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/08/2021 17:28:20-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: REVILLA VILLANUEVA CESAR MANUEL FIR 44275599 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/08/2021 14:55:10-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 1 **de** Setiembre **de** 2021

Con acuerdo del Consejo Directivo, se actualizó, en el estado en el que se encuentra, el Proyecto de Ley 6999/2020-CR.—

JAVIER ANGELES ILLMANN
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

332

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA EXPANSIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE

<u>Artículo 1</u>. Objeto de la Ley

La ejecución de inversiones que genere el desembolso de recursos públicos y/o garantías financieras o no financieras por parte del Estado, lo que incluye a las obras públicas, las inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones público privadas u otros mecanismos de inversión, a cargo de los pliegos del gobierno nacional, regional y local, entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, cuyos montos superen los diez millones de soles, son objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República.

<u>Artículo 2</u>. Financiación del control concurrente

2.1. Para la aplicación del mecanismo de control gubernamental en las inversiones a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, se destina para su financiamiento hasta el 2% (dos por ciento) de su valor total, desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de su estructura de costos, como costos indirectos u otros costos, un rubro denominado Control Concurrente, el cual corresponde al financiamiento de las acciones a ser efectuadas por la Contraloría General de la República bajo dicha modalidad de control gubernamental.

2.2. Los pliegos comprendidos en esta modalidad de control gubernamental, habilitan el rubro Control Concurrente dentro de la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros de la categoría del gasto de capital, con cargo al presupuesto institucional de las entidades, como parte de la estructura de componentes a ejecutar.

Artículo 3. Iniciativas de contratación

Asimismo, toda ejecución de cualquier iniciativa de contratación de bienes y servicios que no constituyan inversión, por parte de los pliegos del gobierno nacional, regional y local, entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del FONAFE, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, cuyos montos convocados superen los diez millones de soles, son objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República. Para este efecto, los pliegos comprendidos en dicha modalidad de control gubernamental deben destinar para su financiamiento hasta el 2% del monto convocado con cargo a su presupuesto institucional en la categoría de gasto corriente.

Artículo 4. Transferencias

4.1. Para el cumplimiento de la presente ley, autorízase a los pliegos involucrados del gobierno nacional, regional y locales, a cargo de las intervenciones a que se refieren los artículos 1 y 3 de la presente ley, a realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático para habilitar la genérica de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias tanto para la categoría de gasto corriente y gasto de capital, quedando exceptuadas de las restricciones presupuestarias en el marco de lo establecido en las leyes anuales de presupuesto, a fin de poder realizar transferencias financieras a favor del pliego 019 - Contraloría General de la República, a solicitud de dicha entidad fiscalizadora superior, conforme a los cronogramas de ejecución de obras anuales valorizadas vigentes, programa de ejecución de obras, planes de inversión, plan anual de contrataciones o documentos de similar naturaleza.

4.2. Las transferencias a que se refiere el párrafo precedente, se aprueban mediante resolución del titular del pliego en el caso del gobierno nacional, o con resolución ejecutiva regional o resolución de alcaldía, en el caso de los gobiernos regionales y locales, respectivamente. La resolución del titular del pliego del gobierno nacional y la resolución ejecutiva regional se

publican en el diario oficial El Peruano y la resolución de alcaldía, que se publica en su página web.

4.3. *Asimismo, autorízase a las entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del FONAFE, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control a realizar transferencias financieras a favor del pliego 019 - Contraloría General de la República, a solicitud de dicha entidad fiscalizadora superior. Las citadas transferencias se aprueban por decisión de la máxima autoridad ejecutiva de las mismas y se publican en su página web.*

4.4. *La Contraloría General de la República incorpora los recursos transferidos en el marco de lo dispuesto en el presente artículo, en la categoría de gasto corriente en la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias, a fin de garantizar la oportunidad de los servicios de control. Estos recursos pueden ser destinados a las intervenciones de control gubernamental a nivel nacional.*

<u>Artículo 5</u>. Implementación

5.1. *En la fase de formulación y evaluación, y en la fase de ejecución de aquellas inversiones públicas cuyo monto supere los diez millones de soles, la misma debe contar en su estructura de costos, una partida para el financiamiento de las acciones de control concurrente a cargo de la Contraloría General de la República, conforme a lo dispuesto en la presente ley.*

5.2. *Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe, a incorporar, en sus instrumentos de gestión, la implementación de la previsión de recursos financieros para el control concurrente.*

<u>Artículo 6</u>. Medidas para garantizar el control gubernamental durante el proceso de absorción de los órganos de control institucional a la Contraloría General de la República

6.1. *Las entidades del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y locales, así como las entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el*

ámbito del FONAFE, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control mantienen, con cargo a su presupuesto institucional, el financiamiento para la asignación de recursos humanos para el apoyo técnico administrativo, así como de recursos logísticos tales como servicios, mobiliarios y materiales; e infraestructura necesaria para garantizar el normal desempeño de las funciones de los órganos de control institucional (OCI).

6.2. Excepcionalmente, la Contraloría General de la República podrá incorporar a los OCI de las entidades señaladas en el párrafo precedente, que no hayan realizado la transferencia financiera, sin perjuicio de continuar con las gestiones administrativas e identificación de responsabilidades que correspondan.

6.3. Durante el proceso de incorporación progresiva de los OCI, establecido en la tercera disposición complementaria final de la Ley 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, exceptúase a la Contraloría General de la República de la presentación de los documentos de gestión institucional para la actualización de los registros en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.

<u>Artículo 7</u>. Responsabilidad

El titular de la entidad, así como los funcionarios que, en el marco de sus funciones, son responsables de los procesos de transferencia, incurren en responsabilidad, cuando omiten, rehúsan o retardan la efectiva transferencia de los recursos solicitados por la Contraloría General de la República, en el marco de las disposiciones de la presente ley.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Inversiones en fase de ejecución

Para aquellas inversiones que se encuentren en fase de ejecución, los pliegos quedan facultados a financiar este mecanismo de control con cargo a su

presupuesto institucional de gastos de capital, sin demandar recursos adicionales al tesoro público; incorporando dentro de los costos indirectos u otros costos, de la estructura de costos de la inversión, el rubro denominado Control Concurrente, dentro de la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros, de la categoría del gasto de capital, con cargo al presupuesto institucional de las entidades, como parte de la estructura de componentes a ejecutar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Modalidades de control

El control concurrente no limita a la Contraloría General de la República la ejecución de cualquier otra modalidad de control a las inversiones o contrataciones de bienes y servicios a los que hace referencia la presente ley. Asimismo, no limita la posibilidad de que la misma disponga la ejecución de control concurrente en el marco de sus competencias, conforme a su normativa de control.

SEGUNDA. Regulaciones

La Contraloría General de la República emite las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA